



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0167/2017

FECHA: 13 de octubre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0167/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue:

- Mediante escrito del ahora reclamante registrado en el Ayuntamiento de Mocejón -Toledo- el 3 de febrero de 2017, solicita "información sobre la fecha del Boletín Oficial de la provincia en el que se ha publicado o si está pendiente de publicación el Reglamento de funcionamiento (o equivalente) de la agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Mocejón".
- Al no obtener respuesta, a través de un nuevo escrito registrado en el precitado Ayuntamiento el 5 de abril de 2017, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, solicita la siguiente información:

1. Acta o actas completas y diligenciadas de sesiones plenarias en las que el Ayuntamiento de Mocejón haya procedido a aprobar o

ctbg@consejodetransparencia.es



modificar los estatutos/reglamentos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de este municipio.

2. Documento del reglamento y/o estatutos que el Pleno Ayuntamiento de Mocejón haya aprobado, con sus modificaciones y que actualmente se encuentren en vigor de esta agrupación.
 3. Fecha y número del Boletín Oficial de la Provincia o diario correspondiente en el que se haya procedido a publicar el reglamento/estatutos indicados.
- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber obtenido contestación a su previa solicitud de acceso a la información, el interesado la entiende desestimada por silencio administrativo y, en consecuencia, a través de un escrito registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 26 de mayo de 2017 plantea una Reclamación ante esta Institución al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.
2. El 26 de mayo de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente, por una parte, al Director de la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conocimiento y, por otra parte, al Ayuntamiento de Mocejón a fin de que, en el plazo de quince días, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que se pudiesen formular.

Mediante un oficio del Alcalde-Presidente de la precitada Corporación local registrado en esta Institución el 9 de junio de 2017 se trasladan las siguientes consideraciones:

- El 26 de junio de 1992 se aprobó el Reglamento de Protección Civil, si bien no consta ni ha podido encontrarse, tras una exhaustiva búsqueda por parte del personal municipal, el anuncio de publicación del referido Reglamento que permita su entrada en vigor, tal y como requiere el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- “Como no ha sido posible encontrar publicidad alguna sobre el Reglamento de Protección Civil obrante en estas dependencias municipales, se ha considerado que la norma no se encuentra en vigor, por lo que no se le ha podido facilitar al interesado la documentación especificada en el apartado segundo de la solicitud en tanto y cuanto la norma de referencia no se encuentra en vigor”.
- “Del mismo modo no se ha podido facilitar al interesado la información especificada en el apartado tercero de su solicitud en tanto en cuanto no consta publicidad alguna de la norma que nos ocupa en boletín o diario alguno”.
- “Con fecha de hoy se da traslado al interesado del Acta de la Sesión Plenaria de fecha de 26 de junio de 1992, en cuyo punto nº 7 se acuerda constituir la Agrupación de Voluntarios de protección Civil y aprobar el Reglamento tipo”.



II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - desde ahora, LTAIBG-, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en que, según se contempla en el preámbulo de la LTAIBG, ésta tiene por finalidad “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así



como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A este fin, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública" en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma. Por su parte, el artículo 13 de la LTAIBG define la "información pública" como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con estos preceptos, el concepto de "información pública" que regula la LTAIBG, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso y en suma ejercer el derecho, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la propia LTAIBG en el momento en que se produce la solicitud. Esto es así para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad" - artículo 1 de la LTAIBG-.

Según ha quedado acreditado en las alegaciones remitidas por la Corporación local de referencia, como se ha recogido en los antecedentes de esta Resolución, aquella no dispone de la información solicitada en las preguntas números 2 y 3 del escrito presentado el 5 de abril y en la solicitud de 3 de febrero. De este modo, procede desestimar la Reclamación con relación a estas cuestiones dado que, en atención a lo previsto en los aludidos artículos 12 y 13 de la LTAIBG no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información.

4. Por lo que respecta a la solicitud de información relacionada con el acta o actas de las sesiones plenarias en las que se aprobaron o modificaron los estatutos/reglamentos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, punto primero de la solicitud de 5 de abril de 2017, cabe que nos detengamos en un aspecto de naturaleza formal. De este modo, cabe recordar que las reglas generales del procedimiento administrativo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG especificando su artículo 20.1, en lo que respecta a la resolución de las solicitudes de acceso a la información, que

"La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante".

Por su parte, el apartado 4 del mismo precepto dispone lo siguiente





“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”.

5. Del artículo 20 acabado de reseñar se deducen dos consecuencias. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el párrafo segundo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que el “volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que ha de resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar al resolución por otro mes adicional. La administración municipal en el presente caso no aplicó la ampliación de plazo aludida, según se desprende de los antecedentes obrantes en el expediente, de manera que disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información en materia normativa solicitada.

La segunda consecuencia que se deriva del reiterado artículo 20 de la LTAIBG consiste en que dicho precepto vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso que nos ocupa, según se desprende de los antecedentes, tal fecha es el 5 de abril de 2017, de manera que el órgano competente de la administración municipal disponía de un mes -hasta el 5 de mayo de 2017- para dictar y notificar la correspondiente resolución.

Según consta en el expediente, el Ayuntamiento de Mocejón ha remitido al reclamante el pasado 8 de junio de 2017 copia del acta de la sesión plenaria en la que se acuerda constituir la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil y aprobar el Reglamento tipo. Esto es, teniendo en cuenta que la solicitud de acceso fue presentada el pasado 5 de abril, el expediente se ha resuelto incumpliendo los plazos fijados en la LTAIBG y las reglas generales sobre formalización de acceso a la información del artículo 22 de la LTAIBG. De esta manera, siguiendo el criterio mantenido en anteriores Resoluciones de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -entre otras, las números R/272/2015, de 6 de noviembre; R/355/2015, de 10 de diciembre; y, finalmente, R/388/2015, de 17 de diciembre- ha de concluirse estimando por motivos formales la reclamación planteada. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo acreditado en el expediente, la administración municipal no habrá de realizar actuación material alguna con relación al cumplimiento de esta Resolución dado que ya ha trasladado al ahora reclamante la información solicitada.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **ESTIMAR PARCIALMENTE** por motivos formales la Reclamación presentada por [REDACTED] sin que sea preciso que el Ayuntamiento de Mocejón - Toledo- realice actividad material alguna para el cumplimiento de la misma.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

